

Formato 4 Solicitud de modificación

Fecha de elaboración	Número de modificación
18/07/2022	

Unidad Responsable:	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Clave y nombre del proyecto	F135310 Implementación de medidas preventivas y de acción para el desarrollo de procesos electorales en contextos de complejidad

Modificación Artículo 15 numeral 4	
Titular de la UR	
Líder de Proyecto	
Fecha de inicio	
Fecha de término	
Redacción de objetivo	
Alcance sin impacto presupuestal	
Justificación sin impacto presupuestal	
Transferencia de recursos de proyectos de la UR	
Reducción por ahorro o economía	

Modificación Artículo 15 numeral 5	
Nuevo proyecto	X
Ampliación líquida interna	X
Ampliación y cambio de fuente de financiamiento	
Cambio de UR	
Cancelación	
Alcance con impacto presupuestal	
Reducción	
Transferencia de recursos proyectos de diferentes UR's	
Incremento capítulo 1000 Servicios personales	

Montos de modificación					
Concepto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado Anterior	Reducción (-)	Ampliación (+)	Total (=)
1000					
2000-6000				\$250,000.00	\$250,000.00
1000 TIC					
2000-6000 TIC					
Total				\$250,000.00	\$250,000.00

Justificación	FUNDAMENTACIÓN
	El artículo 14, numeral 1, inciso a) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos (Lineamientos), establece que una vez aprobada la Cartera Institucional de Proyectos (CIP), las unidades responsables (UR) podrán solicitar nuevos proyectos específicos mediante el Formato 4 solicitud de modificación

y dar cumplimiento a los artículos 8, 9, 10 y 11 de los Lineamientos en el siguiente supuesto: por necesidades de la UR, derivadas de situaciones no previstas o supervenientes.

El artículo 15, numeral 5, inciso a) de los Lineamientos, indica que la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) emitirá dictamen de las modificaciones y la UR presentará la solicitud de cambio ante la Junta General Ejecutiva (JGE), entre otros en el siguiente supuesto: creación de nuevo proyecto específico.

Los Lineamientos, en su artículo 15, numeral 3, indica que la UR posterior a la verificación por la DEA, enviará a través del sistema informático de correspondencia el Formato 4 Solicitud de modificación, debidamente firmado electrónicamente por el Titular de la Unidad y/o Enlace CIP y/o Líder de Proyecto. La DRF una vez recibido el Formato 4, notificará por correo electrónico a la UR la apertura del sistema informático para la captura de los Formatos 1a Definición del Proyecto Específico y/o 1c Presupuesto calendarizado.

El artículo 15, numeral 9 de los Lineamientos refiere que la DEA, llevará en el sistema informático el control y registro de los cambios que se realicen a los proyectos específicos que conforman la CIP.

El artículo 16, párrafo 1 de los Lineamientos, señala que, la DRF emitirá la respuesta relativa a la procedencia o improcedencia a solicitudes de proyecto nuevo o de modificaciones capturadas en el sistema informático, cuando éstas últimas así lo requieran conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de los Lineamientos. La respuesta deberá emitirse mediante el Formato 2 Dictamen y enviarse mediante el sistema informático de correspondencia a la UR, dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción de los Formatos firmados 1a y/o 1c y 1 completo para proyecto nuevo.

El Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros (Manual) del Instituto Nacional Electoral (Instituto), en su artículo 5, párrafos, 1, 3 y 6, dispone que el ejercicio, administración, control y rendición de cuentas de los recursos presupuestarios y financieros asignados y/o ministrados a cada UR, son de estricta responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de los mismos, de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables. Asimismo, señala que las y los titulares de las UR serán los únicos facultados para autorizar mediante firma autógrafa, y a través de la herramienta informática vigente, las erogaciones del gasto y podrán designar por escrito a la persona que en su nombre y representación autorice la erogación del gasto, la cual no podrá tener nivel menor a subdirector de área, vocal secretario, coordinador administrativo u homólogos, sin que esto lo exima de su responsabilidad como titular de la unidad. Adicionalmente, no podrán contraer obligaciones previas sin contar con la suficiencia presupuestal respectiva.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual, corresponde a la JGE, a la Secretaría Ejecutiva y a la DEA, en el ámbito de sus respectivas competencias, autorizar las adecuaciones al presupuesto, siempre que permitan el cumplimiento de los objetivos de los programas del Instituto, de conformidad con el Manual.

El artículo 33 del Manual especifica que la DEA generará las adecuaciones al

presupuesto autorizado de las UR que se requieran para atender las prioridades de gasto del Instituto.

De conformidad con el artículo 36 del Manual, en caso de nuevas prioridades, las UR deberán solicitar las adecuaciones presupuestales compensadas estrictamente necesarias que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y programas institucionales, observando las disposiciones normativas que correspondan.

JUSTIFICACIÓN

El 30 de septiembre de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Superior), dictó sentencia en los expedientes SUP-JRC-166/2021 y ACUMULADOS, mediante la cual se ordena al Instituto, a través del resolutivo SEXTO, en el ámbito de sus competencias, las medidas y protocolos necesarios para crear una política electoral nacional para prevenir factores de riesgo de violencia electoral.

Dentro del apartado XI RESOLUTIVOS, en el punto SEXTO, se ordena al Instituto realizar acciones señaladas en la ejecutoria, a partir de la prevención de factores de riesgo de violencia electoral, por lo que se podrán establecer las siguientes medidas y protocolos:

- a) Celebrar convenios de coordinación con las autoridades de seguridad pública y electorales para diseñar metodologías y planes de acción en procesos electorales en zonas conflictivas o de riesgo.
- b) Generar mapas de riesgo con acciones específicas en el ámbito territorial que corresponda, que deberán darse a conocer a la ciudadanía de la forma que se estime más adecuada.
- c) Crear filtros de investigación que sean aplicables a las candidaturas a fin de que los partidos y las autoridades puedan contar con información veraz y precisa para evitar la participación de personas pertenecientes a grupos criminales.
- d) Elaborar un protocolo de guía y actuación de las autoridades para salvaguardar la integridad física de los servidores públicos y de los electores en zonas con presencia del crimen organizado.
- e) Celebrar foros y consultas con expertos en la materia de seguridad para la elaboración de los documentos, protocolos, planes y mapas que estime necesarios.
- f) Reglamentar una facultad de atracción preferente conforme a la cual el instituto nacional electoral pueda atraer en cualquier etapa alguna elección local o municipal en la que se advierta la existencia de factores de riesgo de violencia por parte de grupos criminales.

Se hace referencia en la sentencia que se deberá garantizar la libertad y autenticidad

de las elecciones, a través de las autoridades electorales tanto locales como federales. Que deben adoptarse medidas de no repetición sobre hechos de violencia que se suscitaron en Michoacán y, que, a su juicio, podrían ocurrir en futuras elecciones, la Sala Superior considera que las autoridades electorales, tanto en el ámbito federal como local tienen deberes de cuidado y de prevención, para identificar factores de riesgos internos y externos que pudieran incidir en los procesos electorales.

Indica que la adopción de medidas para prevenir la violación a cualquier derecho humano forma parte del deber de todas las autoridades para que, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan dice derechos humanos y para ello deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos, en términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos deberes implican que las autoridades se anticipen y prevengan razonablemente afectaciones a los derechos de las personas, para lo cual debe jugar un papel activo para inhibir violaciones a derechos humanos de cualquier índole.

En materia electoral, establece que este deber se proyecta, como una obligación constitucional y convencional, a todas las autoridades electorales para que, en el ámbito de sus competencias, actúen frente a actos que pongan en riesgo el desarrollo libre de los procesos comiciales.

Indica la sentencia que las autoridades electorales, en el ámbito de sus competencias, les corresponde evaluar los riesgos que pudieran actualizarse en próximos procesos electorales, particularmente para prevenir escenarios de riesgo derivados, entre otras, de la injerencia de la delincuencia organizada.

En razón que la Sala Superior ordena al Instituto para que, en el ámbito de su competencia, adopte las medidas y protocolos conducentes para prevenir y actuar ante escenarios de riesgo en los procesos electorales, debiendo implementar políticas, estrategias, acciones y medidas de prevención, a través de la colaboración interdisciplinaria con las autoridades encargadas de la seguridad pública, a fin de crear planes y programas integrales de seguridad, se solicita la creación de este proyecto, el cual tiene como objetivo el acatar el resolutive SEXTO de la sentencia dictada en los expedientes SUP-JRC-166/2021 y ACUMULADOS por la Sala Superior.

En una primera etapa relativa a la planeación, materia de este proyecto, se considera necesario la contratación de una empresa consultora experta en materia de seguridad, que realice actividades de diseño metodológico, arquitectura de base de datos y pilotaje necesarios, para que en una etapa posterior se realice el monitoreo, donde se identifiquen tendencias y riesgos concretos, y se presenten recomendaciones para salvaguardar la integridad física de los servidores públicos y de los electores en el Proceso Electoral Federal 2023-2024.

La contratación de la empresa consultora experta en materia de seguridad resulta necesaria, ya que el Instituto carece del personal y conocimiento para desarrollar planes y programas integrales de seguridad, que posibiliten el establecer una metodología y elaboración de reportes para prevenir y actuar ante escenarios de

riesgo en los procesos electorales.

El proyecto específico “F135310 Implementación de medidas preventivas y de acción para el desarrollo de procesos electorales en contextos de complejidad”, requiere un monto de \$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para llevar a cabo la ejecución de las actividades previstas en este. El periodo de ejecución del proyecto específico será del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022.

Cabe señalar que la DEOE, a través de la Dirección de Operación Regional, en estricta observancia a las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria, buscará el máximo aprovechamiento de los recursos financieros correspondientes a este proyecto específico.

El proyecto específico no considera la contratación de personal de honorarios temporales.

Alta de estructura programática

Si	No
X	

UR Ejerce	SP	PP	Py	Partida
OF13	032	R002	F135310	33501

Mtro. Gonzalo Rodríguez Miranda
Director de Operación Regional
Líder del Proyecto

